

C/ERNESTO ANDRÉS GATICA ARIAS
DESCATO EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
ROBO CON VIOLENCIA
R.U.C. 2200285997-5
R.I.T. 2-2024

_____/

Angol, cuatro de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO, OIDO LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ante esta sala única del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, integrada por el juez señor Etienne Fellay Bertholet, Presidente de Sala, jueza señora Karina Rubio Solís y juez señor Francisco J. Boero Villagrán, el día 28 de febrero del año 2024, el Ministerio Público representado por la fiscal adjunta (S) señora Ema Hermosilla Arriagada presentó acusación en contra de Ernesto Andrés Gatica Arias, cédula nacional de identidad 17.352.088-3, soltero, 34 años de edad, nacido el día 25 de septiembre del año 1989, conductor de locomoción pública, domiciliado en pasaje Llullaillaco N°1325 de la comuna de Chillán, quien fue representado por el defensor penal público abogado señor Carlos Matamala Carstens.

SEGUNDO: Que en su acusación el Ministerio Público imputa al acusado la comisión de un delito de desacato a resolución judicial en contexto de violencia intrafamiliar y un delito de robo con violencia.

1. Desacato a resolución judicial en contexto de violencia intrafamiliar.

El día 24 de marzo del año 2022, en horas de la mañana, el acusado Ernesto Andrés Gatica Arias concurrió hasta el domicilio de la víctima, su ex conviviente, Elba Del Rosario Sandoval Tapia, ubicado en calle Bremen N°0429, de la comuna de Angol, tomando una casaca la que mantenía la cédula de identidad y cuenta RUT de la víctima.

Con esta acción el acusado Ernesto Andrés Gatica Arias incumplió la medida cautelar decretada en causa RIT 10-2022 RUC 2210000169-5, contemplada en el artículo 9 letras a) y b) de la Ley 20.066, la cual fue decretada en audiencia de control de detención de fecha 02 de enero del año 2022, donde el acusado fue apercibido de su incumplimiento.

Los hechos descritos configuran el delito de desacato en contexto de violencia intrafamiliar, delito previsto y sancionado en el artículo 240 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 94 de la Ley 19.968 y artículo 10 de la Ley 20.066, en grado de consumado de conformidad a lo establecido en el artículo 7 del Código Penal, perpetrado por el acusado Ernesto Andrés Gatica Arias en calidad de autor material del artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Consigna la acusación del Ministerio Público que no concurren en la especie circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

El Ministerio Público solicita se aplique al acusado Ernesto Andrés Gatica Arias, una pena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo como autor del delito consumado de desacato, penas accesorias legales, pago de multa y de las costas de la causa.

2.- Robo con violencia.

El día 23 de marzo de 2023, alrededor de las 02:40 horas, el acusado Ernesto Andrés Gatica Arias en calle Rancagua con calle Ocalindo, comuna de Angol procedió a abordar a la víctima Francisco Javier Rebolledo Fuentes, quien



transitaba por el lugar, señalándole “concha de tu madre, entrega todas tus weas”, para luego el acusado Gatica Arias abalanzarse sobre la víctima, tomarlo fuertemente del cuello, dándole múltiples golpes de puño en el rostro, logrando de esta manera sustraer desde el bolsillo delantero del pantalón de la víctima, un celular de propiedad de ésta, marca Motorola modelo G30 color negro.

A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con lesiones de carácter leves, consistentes en “hematoma orbitario y frontal importante, contusión occipital”, logrando huir la víctima celular y avisar a Carabineros, quienes finalmente procedieron a la detención del acusado, en circunstancias que mantenía el celular sustraído en su poder.

Los hechos anteriormente descritos son constitutivos, a consideración del Ministerio Público de un delito de robo con violencia, tipificado en el artículo 436 inciso 1º del Código Penal, donde se le atribuye al acusado participación en calidad de autor directo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 14 Nº1 y 15 Nº1 del Código Penal, en grado de desarrollo de consumado.

Estima el Ministerio Público no concurren respecto del acusado circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

El Ministerio Público solicita se condene al acusado Ernesto Andrés Gatica Arias a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias legales y costas de la causa.

Además, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nº19.970, que crea el Sistema Nacional de Registro de ADN, solicita que se ordene la toma de la muestra biológica al acusado con la finalidad de determinar su huella genética y su inclusión en el Registro de Condenados que al efecto administra el Servicio de Registro Civil e Identificación

TERCERO: Que la fiscal adjunta en su alegato de apertura se refirió a los ilícitos materia de la acusación y a la prueba que se rendiría para acreditar los hechos en que se sustentan las acciones delictivas que se atribuyen a la acusación al enjuiciado.

En su alegato de clausura pidió que se dictara veredicto condenatorio por ambos ilícitos en contra del acusado, argumentando que se habían acreditado los hechos, analizó la prueba que incorporó en la audiencia de juicio y se refirió a los delitos imputados.

Replicó a la defensa señalando que la medida cautelar de prohibición de acercamiento se encontraba vigente y el imputado apercebido, lo que fue demostrado con la prueba.

Respecto del delito de robo con violencia se refirió a la declaración de la víctima y que los elementos de la figura penal se encontraban acreditados.

CUARTO: Que el abogado defensor en su alegato de apertura sostuvo que para la imputación penal del delito de desacato a resolución judicial se debía demostrar en el juicio la concurrencia de todas las exigencias legales para configuración del ilícito y que en este caso no hubo una puesta en peligro de la integridad física o vida de la víctima, y que se debía considerar que en la relación de hechos no se señala como habría ingresado a la casa, no hay forzamiento ni oposición por parte de la víctima al ingreso del imputado al domicilio, por lo que no se puede proteger a quien no quiere ser protegida y se debía entender que hubo una renuncia a la protección por un ingreso consentido por parte de la víctima.



Respecto del delito de robo con violencia se refirió a las exigencias legales para su configuración y sostuvo que en este caso hubo una riña en la cual a la víctima se le produjeron lesiones y que no había conexión ideológica y dolo en la apropiación de la especie señalada en la acusación, un teléfono celular.

Manifestó que en este caso, de acuerdo a la acusación, se configura un delito de lesiones en concurso con un delito de hurto, por lo que solicitaba un justo reproche penal.

En su alegato de clausura sostuvo que en cuando a la imputación de delito de desacato, con la prueba rendida no fue posible establecer la antijuricidad formal ni la antijuricidad material.

Expuso que la antijuricidad formal en el delito de desacato requiere por obligación del tipo penal que concurran una serie de elementos: (a) resolución judicial incumplida; (b) que esta se encuentra válidamente notificada; (c) que el imputado se encuentre apercibido; y, (d) que la medida se encuentre vigente a la época de ocurrencia de los hechos.

Indicó que en el juicio fueron presentados por parte del Ministerio Público tres medios de prueba: (a) el acta de la audiencia, que contiene un extracto de lo que se trata en dicha audiencia y que lo que tiene valor es la resolución emitida en dicha instancia procesal, y en el acta de la audiencia no se señala duración de la medida cautelar, señalándose que son del artículo 9 letras a y b de la Ley 20.066, en relación a la Ley de Tribunales de Familia; (b) en el oficio que se envió a Carabineros se señala durante la vigencia del juicio, lo que es vago e impreciso porque no se sabe cuánto va a durar el procedimiento, pero lo que realmente vale y es vinculante que es configurativo del tipo penal es lo que se señaló en la audiencia respectiva; y, (c) del audio que se escuchó no hay señalamiento de la duración de la medida cautelar, lo que no es menor ya que esta fue decretada, de acuerdo a los antecedentes vertidos en la audiencia de juicio con fecha dos de enero del año 2023 y el hecho se produjo el día 24, prácticamente tres meses después de la fecha de su otorgamiento y al no haberse establecido plazo de esta no es posible configurar la hipótesis de un delito de desacato en contexto de violencia intrafamiliar.

Desde el punto de vista de la antijuricidad material, es decir la afectación al bien jurídico protegido, que por un lado es la recta administración de justicia y por otro lado es la protección de la víctima o persona a la cual se le otorgó la medida de protección, se debía considerar que la víctima señaló que ella mantenía una relación de carácter intermitente con su representado, lo que conforme a las máximas de la experiencia significa que tenían reconciliaciones, mantenían una relación puertas afuera, que se mantenía la relación en un momento y en otros se terminaba.

Expuso que la víctima dijo que ella prefería que él estuviera en el interior del domicilio a que estuviera en el exterior, que le causaba más molestia que estuviera en el exterior que en el interior, lo que demuestra que hay un consentimiento manifestado por parte de la víctima de que no se cumpla la medida cautelar, por lo que como dijo en el alegato de apertura no era posible otorgar una protección a quien no la requiere ni la necesita, lo que se demuestra en la conducta desplegada por ella.

Continuó refiriéndose a la declaración de la afectada, señalando que en forma posterior se le consultó a la víctima como había sido el ingreso al



domicilio y ella señaló que entendía, percibía o creía que se había producido por la puerta principal, la que tenía algún desperfecto que permitía el ingreso en cualquier minuto, pero en las fotografías se vio que la puerta estaba en perfecto estado y no se señalaba en ella algún desperfecto y además había una protección perimetral y una pandereta con una altura de más de un metro cincuenta centímetros y una puerta para el acceso al patio de la vivienda y no se pudo establecer que hubiera forzamiento o escalamiento, por lo que desde el punto de vista de la autorización en esta relación intermitente hay un consentimiento de la víctima al ingreso por parte del imputado al interior del inmueble y por ello solicitó que se dictara un veredicto absolutorio.

Respecto del delito de robo con violencia señaló que la principal fuente para la imputación penal es la declaración de la víctima, quien señaló que estaba circulando por la calle, se encontró con dos personas que estaban discutiendo y de cierta forma había una pequeña riña en el lugar y sin mediar provocación alguna, sin mediar palabra alguna el imputado se le abalanzó y lo agredió no haciendo ningún requerimiento de especies que es propio del tipo penal de robo con violencia o robo con intimidación, que es el inicio de la agresión o de la intimidación para lograr la apropiación.

La víctima señaló había sido una situación continua y manifestó que fue un lapso de tiempo de veinte minutos, por lo tanto, no precisó cuánto tiempo duró la agresión ni que se le haya efectuado un registro, que es propio de un delito de robo con violencia.

La víctima dijo que vestía un pantalón de buzo e hizo la diferencia con un jeans, prenda que por ser más apretada es más difícil obtener un elemento que él tuviera, por lo que sus vestimentas no permiten establecer que la violencia fue ejercida con el objeto de lograr la apropiación y al no quedar claramente establecido este requisito del delito no se vence la presunción de inocencia y por ello se le debe sancionar con un justo reproche penal, sancionándolo con un concurso del delito de lesiones leves y el delito de hurto de especie.

Respondió la réplica de la fiscal señalando que en la reproducción del audio de la audiencia en la cual se decretó la medida cautelar no se señala plazo de esta.

Sostuvo que en la acreditación del delito de robo con violencia no quedó claro el nexo causal entre la violencia y la apropiación de la especie.

QUINTO: Que el acusado fue informado por el Tribunal de los derechos que en tal calidad ostenta, entre otros, el derecho a guardar silencio de acuerdo lo prescrito en el artículo 326 del Código Procesal Penal y optó por no declarar en la audiencia de juicio.

SEXTO: Que los intervinientes, conforme lo permite el artículo 275 del Código Procesal Penal, no acordaron alguna convención probatoria.

SEPTIMO: Que a fin de acreditar el hecho punible y la participación culpable que le correspondió en los injustos al acusado, el Ministerio Público rindió prueba testimonial, documental y otros medios de prueba.

Prueba testimonial.

Elba del Rosario Sandoval Tapia. Informó que es mayor de edad, trabaja en forma independiente y vive en la comuna de Angol.

Manifestó que con el acusado a la época de los hechos de la acusación tenía una relación de forma intermitente, por lo que se le efectuó la



advertencia del artículo 302 del Código Procesal Penal manifestando que declararía en la audiencia de juicio.

Interrogada por la fiscal respondió que sabe que fue citada al Tribunal por un desacato.

Expresó que el lapso de tiempo al cual se referiría era corto en el tiempo, pero eran muchos los hechos que ocurrieron, tanto los denunciados como los no denunciados.

Señaló que con Ernesto Andrés Gatica Arias tuvo una relación de convivencia, aproximadamente, desde el mes de mayo del año 2020 hasta el mes de diciembre del año 2021, lo que es una aproximación de fechas.

Se conocieron en la ciudad de Chillán y tuvieron una relación cuando tenían alrededor de quince años de edad y se reencontraron en Angol.

No tuvieron hijos.

En un comienzo la relación era buena, en la cual él viajaba a visitarla los fines de semana y luego comenzó a presentar licencias médicas y comenzó a quedarse en la casa, empezando una convivencia y él ya no se fue más.

En ese tiempo él se quedó sin trabajo y trató de ayudarlo incorporándolo a su emprendimiento, trabajando juntos, pero él comenzó a agredirla física y psicológicamente, lo que provocó que comenzara a alejarse de su círculo cercano, su hermana y cuñado, ya que si hablaba con su cuñado era porque tenía una relación con él, al igual que con los amigos.

Esta situación provocó que comenzara a tener una relación más lejana con sus familiares y amigos. De a poco se alejó de todos y no tenían a quien recurrir para contar lo que le estaba pasando, como cuando la agredía, lo que en algunas ocasiones denunció y en otras no lo hizo.

La trataba en forma despectiva con expresiones denigratorias como prostituta, que era fea, que no servía para nada en lo que hacía, le criticaba la ropa que se colocaba.

El día 1 de enero del año 2022 fue terrible. Ernesto llegó a su casa, no estaban conviviendo, estaba durmiendo en su dormitorio y él le golpeó la ventana, desconociendo si entró por la puerta o saltó la pandereta, se levantó y le preguntó qué era lo que quería y él le dijo que quería sus cosas porque se regresaba a Chillán. En esos momentos lo vio bien, no estaba agresivo, por lo que le abrió la puerta y él entró a retirar sus cosas y le pidió que le depositara dinero para poder viajar a Chillán a lo cual no accedió y él comenzó a destruir todo en el dormitorio. Su hija se levantó y llamó a los carabineros. En esos momentos él salió de la casa y cerraron la puerta, y él comenzó a quebrar los vidrios y destruyó la puerta, la que sacó de su lugar. Luego siguió con el living y la cocina, fue en esos momentos que él le dio una cachetada y su hija trató de separarlo de ella y en esos momentos también agredió a su hija. Llegaron los carabineros quienes lo redujeron y lo sacaron de la casa.

Se hizo la denuncia y él quedó con una orden de alejamiento de su domicilio, lo que nunca respetó porque rondaba la casa, lo que calificó como terrorífico. En la noche saltaba la pandereta por el lado de su dormitorio.

El día 24 de marzo del año 2023 estaba en su domicilio de calle Bremen en la comuna de Angol. Ese día iba a trabajar a la casa de su hermana que está muy cercana a su casa, donde tiene una maquina con la cual trabaja. Fue en la mañana. Le faltaron unas maderas y se devolvió a la casa a buscarlas. Estaba en su dormitorio y vio que él estaba dentro de la casa parado en la



puerta del dormitorio y la insultó. Le dijo que su hermana venía a la casa, por lo que él salió llevándose su casaca que estaba en el sillón y se fue.

Llamó a Carabineros y del banco le llegó una notificación que habían girado la suma de cincuenta mil pesos de su cuenta vista, lo que él pudo hacer porque nunca había cambiado la clave, lo que no estimó necesario debido a que siempre andaba con su tarjeta en el bolsillo.

Los carabineros fueron a tomarle una declaración en la casa por este hecho.

Se le exhibieron las fotografías de su casa. Fotografía uno, señala que muestra el frontis de su casa de calle Bremen. Fotografía dos, señala que muestra la entrada de su casa. Fotografía tres, señala que se muestra el sillón donde dejó su casa, se aprecia el dormitorio de su hija y su dormitorio.

Reconoció al acusado como la persona a la cual se ha referido en su declaración.

Contrainterrogada por el abogado defensor con la fotografía uno, respondió que en las ventanas de la casa hay protección y la pandereta tiene una altura entre un metro y medio a dos metros de altura. Fotografía dos, respondió que la puerta de la casa tiene una chapa de seguridad. Tenía una cámara de vigilancia, la que puso en la ventana, por el costado de su ventana. Con ella registró varias grabaciones en las cuales él se ve merodeando, pero la cámara se la robaron cuando se cambió de casa. Las imágenes las tiene en el teléfono.

Él debió ingresar a la casa por la puerta que antes había destruido el día 1 de enero y cuando la repararon la cerraban con un pestillo porque la chapa quedó mala, pero se podía abrir empujando la puerta y por eso cuando cerraban con el pestillo salían por la puerta de la cocina para que quedara cerrado. La chapa parecía normal.

Cuando él ingresó la puerta estaba sin el pestillo porque había ido a la casa.

Cuando él ingresó el día 24 la relación había terminado, pero él rondaba la casa y la hostigaba, pero ya no tenían la relación.

La relación se volvió intermitente porque la terminaban, pero luego la retomaban, esto porque sentía más miedo que él estuviera afuera de la casa a que estuviera adentro, esto porque no podía dormir. Él tiraba piedras. Era terrible.

Asintió que cuando tenían la relación intermitente le permitía la entrada a la casa.

Al Tribunal le aclaró que las fotografías fueron tomadas por funcionarios de Carabineros. Las tomaron el día 24 de marzo del año 2023. Le giraron dinero de la cuenta rut, cuya tarjeta la tenía en la casaca que él se llevó. La tarjeta la había visto en la mañana y también perdió la cédula de identidad.

Sandra Elizabeth Campos Moya. Informó que ostenta el grado de Sargento Primero de Carabineros de Chile y trabaja en la comuna de Angol.

Interrogada por la fiscal respondió que se presentó a declarar en el juicio porque el día 24 de marzo del año 2022 se encontraba de servicio en la comisaría de Angol y le entregaron un procedimiento por denuncia de desacato. Fue el personal de servicio en la población.

Verificó los antecedentes constatando que se trataba de la señora Elba Sandoval y ella mantenía una orden del Juzgado de Garantía, Causa Rit 10 del año 2022, de fecha 2 de enero del año 2022, la cual se encontraba vigente.



Ella era víctima porque su ex conviviente había ingresado a su domicilio, gritándole improperios y posteriormente salió llevándose especies.

El ex conviviente era Ernesto Gatica.

El domicilio queda en calle Bremen, población Alemania, Angol.

Verificó la pauta de riesgo aplicada a la víctima, la cual estaba adjunta a la orden de medida cautelar.

Contrainterrogada por la defensa respondió que no recordaba la duración de la medida cautelar. La fecha de emisión era el día dos de enero del año 2022.

No recordó si el documento de la medida cautelar tenía fecha.

Sabe que la medida cautelar estaba vigente porque se lo consultó al personal aprehensor. Ellos dejaron copia del documento, lo que se incluyó en el parte que confeccionó.

La pauta de riesgo dio un resultado riesgo bajo, pero el hecho que el denunciado no haya cumplido es significativo.

No sabe cómo el imputado ingresó al domicilio y no tomó las fotografías porque no fue al lugar del hecho, correspondiéndole la confección del parte.

Francisco Javier Rebolledo Fuentes. Informó que es mayor de edad, desabollador y pintor de vehículos, y que vive en la comuna de Angol.

Interrogado por el fiscal respondió que se presentó a declarar por un tema de agresión en la calle.

Le ocurrió alrededor de las tres de la madrugada. Iba transitando por la calle y vio dos muchachos discutiendo y terminaron en una agresión hacia él, uno de ellos.

Ocurrió el día 23 de marzo del año 2023.

Cuando el sujeto lo tenía reducido y le proporcionaba múltiples golpes en la cara y en el estómago, le quito el celular y se lo llevó, y lo pudo recuperar cuando llegaron los carabineros.

Después los funcionarios policiales lo llevaron al hospital para constatar lesiones.

Las personas a las cuales se ha referido, uno es el señor Gatica y el otro es Jacob, un ex guardia de seguridad que ahora está en silla de rueda y situación de calle.

A Jacob lo ubica porque en la población normalmente estos muchachos andan pidiendo dinero y otras cosas, y por ello todos los días los veía en el lugar.

Se siente sorprendió de lo que ocurrió esa noche porque siempre le daba dinero o cigarrillos a quienes le pedían.

De este grupo al único que no ubicaba fue al joven que lo agredió. La persona se llama Ernesto Gatica Arias. Fue esta persona quien le quitó su celular, que es su herramienta de trabajo. Se lo quito de los bolsillos mientras lo tenía sujeto en el piso, con una mano en el cuello.

Respecto al tiempo que duró esta acción fue entre quince minutos a media hora, pero le resultó difícil calcular un tiempo porque estaba recibiendo golpes y no era algo de lo que hubiera estado preocupando cuando le ocurrió.

La agresión que estaba sufriendo fue interrumpida en un momento, para luego sujetarlo y fue en ese momento que le sustrajo el celular. Y se lo llevó.

Después que le ocurrió esto se fue a su casa que quedaba un poco más allá del lugar donde ocurrió el hecho, informándole a su hermano de nombre Rodolfo y con él llamaron por teléfono a carabineros y su hermano lo



acompañó para ver si podían localizar al muchacho en la calle y poder recuperar sus pertenencias.

Estaban en la calle cuando llegaron los carabineros y los muchachos se encontraban cerca del lugar.

El hecho ocurrió en calle Rancagua con calle Ocalindo, su casa queda por calle Chacabuco y el muchacho se encontraba por la misma calle Chacabuco en dirección a calle Recabarren hacia calle campo de Marte.

La distancia sería de unos cien metros, una cuadra.

El teléfono celular es marca Motorola modelo G 30 con una carcasa azul y el celular era de color negro, el que aún mantiene consigo.

Se incorporó una fotografía, que le fue exhibida respecto de la cual manifestó que la persona que aparece es él y se aprecia su ojo cerrado, el que tuvo en esta condición por un lapso de tiempo de cinco días y su cara hinchada.

La fotografía se la tomó el mismo después que le constatará lesiones en el hospital, al llegar a su casa.

Se incorporó mediante lectura el registro de atención de urgencia del hospital por este hecho.

Reconoció al acusado como la persona que lo agredió y sustrajo el teléfono.

La otra persona de nombre Jacob se mantuvo a distancia y trataba que su agresor parara, pero no intervino en la agresión. Le decía a su agresor que parara.

En recuperarse de las lesiones demoró unos catorce días.

Contrainterrogado por el abogado defensor respondió que cuando le devolvieron el teléfono Jacob se encontraba presente a unos metros de distancia hacia la esquina.

Al Tribunal le aclaró que el teléfono lo tenía en el bolsillo del pantalón de buzo que vestía, que sintió que le introdujeron la mano para sacar el teléfono celular y que este aparato no se le cayó al piso.

Conoce el nombre de su agresor porque este le hizo llegar una carta con un capellán de la cárcel y en ella estaba el nombre. Aunque no se refirió al contenido de la carta, le pareció que ella era se le hostigaba.

Yanela Solange Reyes Castro. Informó que ostenta el grado de Sargento Primero de Carabineros de Chile y trabaja en la comuna de Concepción.

Interrogada por la fiscal respondió que fue citada a declarar en este juicio por un detenido por robo con violencia; hecho que ocurrió en el mes de marzo del año 2023.

Manifestó que el día 23 de marzo del año 2023 se encontraba de servicio nocturno con otros dos funcionarios. Alrededor de diez para las tres de la madrugada Cenco les comunicó que una persona había sido víctima de robo en calle Rancagua con calle Ocalindo.

En el lugar se entrevistaron con la víctima de nombre Francisco Rebolledo Fuentes, quien mantenía lesiones muy evidentes en su rostro porque estaba hinchado, tenía moretones en los ojos y sangraba, y este le dijo que mientras caminaba por el lugar había dos personas de sexo masculino que se encontraban discutiendo y cuando pasaba por el lugar, uno de ellos sin ningún tipo de provocación, que vestía un poleron negro con capucha, se abalanzó sobre él tomándolo del cuello y comenzó a agredirlo con golpes de puño y



además que con garabatos le manifestaba que le entregara todo lo que tuviera, que le siguió pegando y desde el pantalón le sustrajo un teléfono celular que portaba en su pantalón.

Después de ser agredido llamó a Carabineros y estas personas, la que participó en la agresión y el otro, estaban cercanos en el lugar, a una distancia de alrededor de una cuadra.

Cuando se entrevistaron con la víctima, este lo sindicó en forma inmediata como el autor de sus lesiones y el robo de su teléfono celular.

A la persona que sindicaba la víctima se le realizó un control de identidad. La persona controlada fue Ernesto Gatica, quien en forma voluntaria hizo entrega del teléfono que le había sustraído al perjudicado momentos antes.

Procedieron a la detención de esta persona al ser sindicado como autor del robo y de las lesiones de la víctima.

El teléfono celular era Motorola color negro, el que fue devuelto a la víctima en el lugar y este firmó el acta correspondiente.

Se incorporó mediante lectura el documento extracto CAD de Carabineros de Chile, que da cuenta del procedimiento policial adoptado.

Reconoció al acusado como la persona que fue detenida el día del procedimiento policial que relató.

Contrainterrogado por el abogado defensor respondió que cuando detuvo a Ernesto Gatica, este estaba junto a otra persona. Asintió que se le hizo un control investigativo porque debieron establecer su identidad, ya que la persona no portaba cédula de identidad.

La víctima dijo que fue un solo agresor y sindicó solo a uno de estas personas.

En su declaración la víctima expresó que la otra persona no participó en el delito y por ello no se le detuvo. También se estableció la identidad de esta otra persona, se negó a declarar diciendo que no quería problemas y se retiró.

Cuando llegó al lugar ambas personas, el detenido y la otra, estaban de pie en calle Carmen Soto con calle Ocalindo.

Cuando llegó al lugar del hecho la víctima se acercó de inmediato al vehículo policial, encontrándose a una distancia de alrededor de media cuadra de la persona que fue detenida.

Al Tribunal le aclaró que cuando se entrevistó con la víctima las personas se acercaron hasta donde se encontraban. Fue en dicho momento que la víctima le requirió el teléfono al sujeto y el sindicado se lo entregó sin necesidad de efectuar el registro de sus vestimentas, lo que presenció.

Prueba documental y otros medios de prueba.

1.- Copia autorizada de acta de audiencia de control de detención del Juzgado de Garantía de Angol llevada a efecto en causa RIT 10-2022 RUC 2210000169-5.

2.- Registro de audio de la audiencia de control de detención del Juzgado de Garantía de Angol llevada a efectos en causa RIT 10-2022 RUC 2210000169-5.

3.- Resolución de medidas cautelares de fecha 2 de enero de 2022 en causa RIT 10-2022 RUC 2210000169-5.

4.- Set de 3 fotografías del sitio del suceso en calle Bremen de la ciudad Angol.



5.- Una Hoja de Atención de Urgencia del Hospital de Angol relativa a la atención médica de la víctima Francisco Rebolledo Fuentes y anexo resumen.

6.- Una fotografía del rostro de Francisco Rebolledo Fuentes

7.- CAD Extracto y Oficio 35 de fecha 28 de marzo de 2023 que contiene resumen del procedimiento policial registrado por Carabineros de Chile.

OCTAVO: Que la defensa del acusado no presentó prueba en la audiencia de juicio.

NOVENO: Que el Tribunal apreciando las pruebas rendidas en la audiencia, con libertad, según lo permite el artículo 297 del Código Procesal Penal, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, tiene por acreditado, más allá de toda duda razonable, los siguientes hechos:

El día 24 de marzo del año 2022, en horas de la mañana, el acusado Ernesto Andrés Gatica Arias concurrió e ingreso al domicilio de la víctima de Elba Del Rosario Sandoval Tapia, su ex conviviente, ubicado en calle Bremen N°0429, de la comuna de Angol, infringiendo la medida cautelar de prohibición de acercarse a su ex conviviente que le fuera impuestas y apercibida para su cumplimiento el día 2 de enero del año 2022 en audiencia de control de detención y requerimiento de procedimiento simplificado verbal en la causa RIT 10-2022, RUC 2210000169-5 realizada en su contra por el Ministerio Público ante el Juzgado de Garantía de Angol, las que se encontraban vigentes a la fecha de ocurrencia del hecho.

El día 23 de marzo de 2023, en horas de la madrugada, el acusado Ernesto Andrés Gatica Arias en calle Rancagua con calle Ocalindo de la comuna de Angol, procedió a abordar a la víctima Francisco Javier Rebolledo Fuentes, quien transitaba por el lugar, agrediendo con golpes en su rostro, provocándole un hematoma orbitario y frontal y contusión occipital, luego lo inmovilizó y le sustrajo desde el bolsillo delantero del pantalón su teléfono celular marca Motorola, modelo G30, color negro, del cual se apropió llevándose consigo y en forma posterior se lo devolvió a la víctima a requerimiento de esta, cuando llegó hasta el lugar personal de Carabineros de Chile para atender el procedimiento policial por la denuncia efectuada por la víctima.

DÉCIMO: Que respecto de los hechos acontecidos el día 24 de marzo de 2022, cuya afectada es Elba Del Rosario Sandoval Tapia, la integrante e integrantes del Tribunal los establecimos escuchando el testimonio de la protegida por la decisión jurisdiccional cautelar, quien al declarar en la audiencia de juicio dio cuenta de hechos que le ocurrieron a ella, lo que no lleva a que se trata de una testigo presencial de los mismos, señalando la declarante un determinado lugar y espacio temporal en que ocurrieron los sucesos que detalló, los que percibió con sus sentidos, respecto de los cuales la integrante e integrantes del Tribunal no podemos formularle reproche sobre que estos sean vagos, imprecisos o que no tengan relación con los hechos consignados en la acusación del Ministerio Público, como tampoco se pueden advertir contradicciones que nos lleven a dudar del cargo que le hace al acusado de haber entrado en su casa y tomado contacto con ella, cuando dicha acción le estaba prohibida por una decisión jurisdiccional.

El relato que nos entregó la afectada no permite establecer que la acción infractora que le atribuye al acusado haya sido casual ni que ella la hubiere permitido de alguna manera acercársele, pues no se repara que en sus dichos



hubiese existido acción o gesto que el enjuiciado hubiese podido interpretar que el acercamiento a ella no sería rechazado, y del interrogatorio y contrainterrogatorio a los cuales fue sometida la afectada, los miembros del Tribunal concluimos que ella se dio cuenta que el acusado estaba dentro de la casa cuando ella estaba en el dormitorio, y en sus dichos no hay elementos que nos permitan sostener que en forma previa afectada y enjuiciado hubieran tenido una interacción que hubiese podido dar pie para que luego el encartado hubiese entrado en la casa y acercado a ella.

La existencia de la orden judicial que al acusado le impedía acercarse a la víctima, fue acreditada por la fiscal incorporando copia del acta de audiencia de control de la detención y requerimiento verbal en procedimiento simplificado en causa Rit 10-2022, RUC 2210000169-5 del Juzgado de Garantía, en el cual se le imputa al acusado Gatica Arias ser autor de dos delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia presuntamente cometidos el día 1º de enero del año 2022 cometidos en contra de Elba Sandoval Tapia, conviviente del requerido, y Polet Urra Sandoval, hija de la conviviente del requerido, escuchando también la jueza y jueces del Tribunal el registro de audio de esta audiencia y se le imponen las medidas cautelares de abandono del hogar que comparte con la víctima y prohibición de acercamiento y se fija audiencia de procedimiento simplificado para el día 19 de mayo del año 2022.

Si bien es cierto lo que manifiesta el abogado defensor sobre que en el registro de audio de la audiencia de control de la investigación y requerimiento en procedimiento verbal, no se expresa una fecha determinada de duración de las medidas cautelares, este Tribunal entiende que dichas cautelares se encontraban vigentes al día 24 de marzo del año 2022, en razón que la finalidad de ellas es amparar al ofendido mientras dura la tramitación del proceso judicial, de allí su denominación legal procedimental de cautelares, y, también, se comprende por los integrantes del Tribunal sobre la vigencia de las mismas al escuchar el audio de la referida audiencia que estas por lo menos estaban vigentes hasta la fecha de la citación a audiencia del procedimiento simplificado para el día 19 de mayo del año 2022, fecha posterior al día 22 de marzo del año 2022 en que ocurre el hecho materia de este juzgamiento.

Si no hubiera habido claridad acerca de la vigencia de las medidas cautelares el abogado defensor presente en la señalada audiencia habría podido pedir a la señora jueza la aclaración respectiva o el propio enjuiciado haber manifestado que no tenía claridad cuando se le explicó el alcance de las medidas cautelares, las que manifestó entender cuando se le pregunto por ello.

Ante este Tribunal no se hizo valer ningún antecedente cual el cual la jueza y jueces pudiéramos advertir y establecer que la vigencia de la medida cautelar era inferior, y en este sentido la resolución que se envió a Carabineros de Chile por el Juzgado de Garantía de Angol, incorporada como prueba documental, da cuenta que las medidas cautelares tenían vigencia durante el tiempo que se extendiera la presente causa, y en ello se debe considerar el límite de 180 días hábiles de duración que establece el legislador en el artículo 92 N°1 de la Ley 19.968, base del régimen cautelar en materia de violencia intrafamiliar y que existía una audiencia de procedimiento simplificado fijada para el día 19 de mayo del año 2022.



El Tribunal recibió el testimonio de la carabinera Sandra Campos Moya, quien dio cuenta de su intervención en el procedimiento policial por haberle correspondido redactar el parte denuncia por desacato el día 24 de marzo del año 2022 y señaló que la medida cautelar se encontraba vigente porque se lo preguntó al personal aprehensor y que el documento de la medida se adjuntó al parte denuncia, o que nos lleva a que los funcionarios de Carabineros de Chile realizaron el procedimiento policial teniendo como antecedente la resolución que se les envió en la cual se señala que las medidas cautelares tenían vigencia durante el tiempo que se extendiera la causa y de ello y la declaración de la carabinera Campos Moya se puede deducir que Carabineros de Chile no había recibido ninguna resolución del Juzgado de Garantía que las hubiera dejado sin efecto.

Por otro lado, que el acusado hubiese podido suponer que la medida cautelar no se encontraba vigente no se recibió indicio que condujera a la jueza y jueces a establecer ello, y lo que expuso la afectada por la vulneración a la orden judicial sobre lo sucedido ese día cuando se incumplió la medida cautelar fue que le dijo al enjuiciado que su hermana venía a la casa, por lo que él salió llevándose su casaca y se fue, acción propia de alguien que actúa furtivamente y ello más convence a los integrantes del Tribunal que el enjuiciado conocía perfectamente el alcance de las prohibiciones que le impuso la jueza de garantía y que sabía que no podía estar en dicho lugar.

La convicción del Tribunal sobre la ocurrencia del hecho ilícito consistente en que el acusado ingresó al domicilio del calle Bremen comuna de Angol que se le había ordenado abandonar y se acercó en dicha acción a una de la víctima respecto de la cual tenía prohibición de acercamiento, se basa en el testimonio de la afectada, Elba Del Rosario Sandoval Tapia, el cual fue sopesado teniendo en consideración que en esta clase de hechos que se enmarcan en situación de violencia intrafamiliar que en su gran mayoría ocurren sin la presencia de testigos que puedan ayudar a entregar certeza a cerca de la existencia de los mismos o cómo sucedieron, el relato de la afectada, en este caso, se basta a sí mismo para lograr el convencimiento necesario en el Tribunal para dictar veredicto condenatorio, en razón a que como se expuso se trata de un testimonio al cual no se le puede formular reproche por parte de estos juzgadores y en las alegaciones de la defensa del acusado no se efectúan cuestionamientos que hubieren llevado a restar credibilidad a los dichos de la perjudicada, pues no se cuestiona que el acusado se haya acercado a la víctima en el interior del domicilio, ya que el defensor en su contrainterrogatorio a la perjudicada dirigió la atención del Tribunal a establecer dudas sobre si el ingreso fue permitido o no por la afectada, haciendo preguntas sobre las medidas de protección de las ventanas, la altura de la pandereta y el estado de la puerta de ingreso a la casa, lo que ella explicó claramente y esto nos conduce a que los dichos de la afectada sean incólumes y sin contrariedad a otra prueba del juicio.

Asimismo, se debe considerar que la víctima ocurrido el hecho llamó a Carabineros de Chile para denunciar lo sucedido, lo que da cuenta de que informa inmediata se puso en conocimiento de la autoridad y ello es propio de alguien que se siente vulnerado o amenazado por la acción del tercero, que en este caso tenía prohibido acercarse a la afectada.

Además, la defensa se centró sus alegaciones en desestimar la existencia de los elementos necesarios para la acreditación del delito de



desacato a resolución judicial, a lo cual nos hemos referido para dar respuesta a sus alegaciones.

UNDECIMO: Que en los hechos acontecidos el día 24 de marzo de 2022 cuya víctima es Elba Del Rosario Sandoval Tapia, se reúnen las exigencias para la configuración del delito de desacato a resolución judicial establecido en el artículo 240 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil, toda vez que: a) existe una resolución judicial dictada con fecha 2 de enero del año 2022 que impuso la medida cautelar al acusado de prohibición acercarse a su ex conviviente Elba Del Rosario Sandoval Tapia y a su domicilio en el proceso penal RUC 2210000169-5, RIT 10-2022 del Juzgado de Garantía de Angol; b) la resolución se encontraba vigente cuando ocurrieron los hechos el día 24 de marzo de 2022, en razón que la audiencia de procedimiento simplificado se fijó para el día 19 de mayo del año 2022 y el Tribunal estableció que esta estaría vigente mientras durará la tramitación del proceso; c) fue debidamente puesta conocimiento del acusado comunicándosela por la señora jueza en la audiencia de control de detención y requerimiento verbal de procedimiento simplificado dándole a conocer al enjuiciado su contenido y alcance; y, d) el acusado ingresó al inmueble de calle Bremen acercándose a la víctima Elba Del Rosario Sandoval Tapia, lo que constituye una conducta que infringe la orden judicial que se le dio; esto es, que intencionalmente ejecutó la acción que la resolución le prohibía.

Concluye este Tribunal que la acción desplegada por el acusado cumple con todas las exigencias legales para establecer que la transgresión a la prohibición impuesta al acusado, constituye el delito de desacato a resolución judicial, en el cual este tiene la calidad de autor ejecutor, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal y el delito se encuentra consumado.

Conforme con los antecedentes presentados en la audiencia de juicio, el Tribunal estima que no existió justificación de hecho ni legal para que el acusado hubiese incumplido la medida cautelar que se le impuso y le explicó la jueza de garantía en la audiencia del día 2 de enero del año 2022, y por otro lado, deseamos la alegación de la defensa que la víctima Elba Del Rosario Sandoval Tapia hubiese consentido en que el acusado se le acercara, no pudiendo desprenderse este consentimiento de su testimonio en el cual claramente ella manifestó al ser contrainterrogada que cuando ocurrió el hecho materia de juzgamiento, ya no tenían ningún tipo de relación con el enjuiciado ni siquiera de forma intermitente, como lo sostuvo la defensa del acusado en sus alegaciones de absolución y no estando ella sometida a ninguna prohibición o restricción no es procedente que su conducta sea excusa para el incumplimiento de la medida cautelar, más cuando no se demostró que la conducta perjudicada de alguna forma haya influido en la acción del enjuiciado de acercársele ingresando hasta el interior de la casa como lo relató la señora Sandoval Tapia.

DUODECIMO: Que respecto de los hechos acontecidos el día 23 de marzo de 2023, cuyo perjudicado es Francisco Rebolledo Fuentes los hemos establecido con el testimonio del propio afectado quien dio cuenta de sucesos que le ocurrieron la madrugada del día 23 de marzo del año 2023 mientras caminaba por la calle, entregando en su relato el espacio temporal y físico que se contiene en la acusación del Ministerio Público, y dio cuenta de las acciones que el acusado, a quien reconoció mientras declaraba ante este Tribunal y



sindicó como autor de los hechos que le afectaron, refiriéndose a la forma en que el enjuiciado acometió en su contra golpeando hasta inmovilizarlo, registrarlo y llevarse su teléfono celular que tenía en el bolsillo de su pantalón.

Al respecto, los dichos del afectado sobre la agresión de la cual fue objeto en forma previa a la sustracción de su teléfono, fue acreditada con la correspondiente hoja de atención de urgencia emitida por el hospital de Angol, incorporada como documento mediante lectura, y también con otro medio de prueba consistente en una fotografía, que se exhibió al afectado mientras declaraba, que muestra el rostro de un hombre joven que tiene la mejilla derecha hinchada y el ojo izquierdo cerrado con inflamación de su párpado y color oscuro, la que la víctima manifestó que se había tomado a si mismo cuando llegó a su casa luego de la atención que recibió en el hospital.

Además, se contó con la declaración de la carabinera Reyes Castro, quien tiene la calidad de testigo presencial respecto de los hechos que constató y vio la madrugada del día 23 de marzo del año 2023, informando al Tribunal que se encontraba de servicio con otros funcionarios policiales y por un comunicado de Cenco, centro de comunicaciones de Carabineros, concurrió a calle Rancagua con Ocalindo encontrándose con Francisco Rebolledo Fuentes, quien se acercó al vehículo policial, manifestándole haber sido víctima de una agresión y sustracción de su teléfono, señalando la carabinera al declarar ante este Tribunal que esta persona tenía el rostro hinchado, moretones en los ojos y sangraba, corroborando de esta forma los dichos del perjudicado sobre que fue víctima de una agresión por parte del acusado.

Asimismo, la aseveración de Francisco Rebolledo Fuentes que el enjuiciado metió su mano en los bolsillos de su pantalón de buzo y le sustrajo el teléfono celular de cual se apropió llevándose consigo, quedó establecida para los integrantes del Tribunal con los dichos de la carabinera Reyes Castro, quien dio cuenta que la víctima le dijo que agresor le sustrajo el teléfono y lo sindicó encontrándose el imputado con otra persona a media cuadra de donde estaban y este fue a donde se encontraban, momento en el cual la víctima lo interpeló para que le entregara el teléfono celular, lo que el enjuiciado hizo en su presencia sin la necesidad que procediera al registro corporal, llevan a que el Tribunal con los testimonios de Rebolledo Fuentes y la carabinera Reyes Castro diera por establecidos los hechos señalado en el considerando anterior, los que fueron previamente imputados al acusado por el Ministerio Público en la acusación presentada por estos hechos.

Respecto de la alegación de la defensa sobre que los hechos corresponden a un delito de lesiones menos graves en concurso con un delito de hurto del artículo 432 en relación al artículo 446 N°3 del Código Penal, para lo cual argumentó que la forma de ocurrencia de los hechos daba cuenta de un dos acciones distintas, ya que al momento de ocurrir la agresión no hubo requerimiento de especies lo que era propio de la figura del delito de robo con violencia y que el registro de ropa fue posterior, el Tribunal no comparte la forma en que la defensa interpreta la declaración de Francisco Rebolledo Fuentes, teniendo en consideración que la conducta ilícita no exige una verbalización de la intención del ejecutor sino que esta se desprende de los sucesos, y en este caso la víctima fue clara en manifestar que el acusado lo agredió cesando en un momento, sujetándolo y le sustrajo el teléfono celular, señalándole al Tribunal que sintió su mano en el bolsillo de su pantalón de buzo y que el teléfono no se le había caído, lo que conduce a que se trate de



una sola acción ilícita cuya intención fue sustraer especies de valor que la víctima llevaba consigo, sin que se pueda sostener probatoriamente que la apropiación de la especie haya surgido en forma posterior y producto de un mero azar que le permitió llevarse el teléfono celular luego de golpear a la víctima.

DECIMOTERCERO: Que en los hechos acontecidos el día 23 de marzo de 2023 cuya víctima es Francisco Rebolledo Fuentes, se reúnen las exigencias necesarias para la configuración del delito de robo con violencia contemplado en el artículo 432 en relación al artículo 436 inciso 1º del Código Penal, conforme con las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

La acción desplegada por el enjuiciado reúne los requisitos de apropiación de cosa corporal mueble ajena, toda vez que conforme se acreditó la especie, un teléfono celular, le fue arrebatada a su dueño y tenedor, configurándose de esta forma que el acusado mediante su acción logró que la víctima perdiera la tenencia y posesión material de su pertenencia pasando a sustituirla en dicha posición, quedando entonces a partir de este momento en situación de realizar actos de disposición sobre esta especie con la consecuente privación que sufrió la víctima a partir de dicho momento que fue excluida de la detentación material y posibilidad de ejercer su derecho sobre ella, recuperándola solo porque hasta el lugar llegó personal de Carabineros de Chile y a requerimiento de la víctima la entregó en presencia de los funcionarios policiales, conforme dio cuenta al Tribunal la carabinera Reyes Castro.

Asimismo, esta apropiación fue efectuada con ánimo de lucro desde el momento que la especie sustraída se la llevó el acusado y ello, solo puede estimarse que fue con el fin de efectuar un aprovechamiento de la misma, pues si se la sustrajo desde el bolsillo del pantalón, la llevó consigo porque le reportarían beneficio al venderla o utilizarla él mismo en su provecho.

Además, esta apropiación fue de carácter ilegítima, en razón a que no existió por parte de su legítimo tenedor consentimiento para que la especie le fuera sacada desde el bolsillo del pantalón y menos por la forma en que se logró el apoderamiento, recurriendo a actos con que se afectó la integridad física de la víctima, golpeando hasta causarle lesiones para reducirlo y registrarlo, lo que coloca la acción ilícita en la hipótesis de violencia que se describe en el artículo 439 del Código Penal, que establece que la calificación jurídica que debe darse a este hecho ilícito es la de robo con violencia del citado artículo 436 inciso 1º del Código Penal.

El hecho delictual se encuentra consumado desde el momento en que la cosa del perjudicado fue llevada por el acusado consigo, quien tiene la calidad de autor ejecutor del artículo 15 N°1 del Código Penal, colocándose en la real posibilidad de disponer de ellas a su entera voluntad.

DECIMOCUARTO: Que, para la determinación de la pena, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 343 del Código Procesal Penal, la fiscal adjunta incorporó el extracto de filiación del acusado, dando a conocer que en causa Nro.2.584/2010, RUC 1.000.383.177-4 del Juzgado de Garantía de Chillán, fue condenado como autor consumado de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, por resolución de fecha 14 de junio del año 2010, a pena de multa de un quinto de unidad tributaria mensual, la que se dio por cumplida.



Pidió que se le aplicaran las penas solicitadas imponer en la acusación, ya que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que se deban considerar.

Por su parte el abogado defensor solicitó que a su defendido se le reconociera la concurrencia de la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, sosteniendo que, al habersele impuesto la pena de multa, lo que correspondía a una falta cuyo plazo de prescripción era de seis meses, procedía aplicar la señalada circunstancia atenuante.

Para la determinación de la pena en el delito de robo con violencia, al no existir elementos que determinen una mayor extensión del mal causado y considerando la concurrencia de una circunstancia atenuante, pidió que se impusiera el mínimo legal de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Para el delito de desacato al concurrir una circunstancia atenuante de responsabilidad penal y ninguna agravante, solicitó la imposición de una pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio.

DECIMOQUINTO: Que respecto de la concurrencia de la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, la que el abogado defensor sostuvo que concurría basándose en que el plazo de prescripción para las penas de multa es de seis meses, el Tribunal desecha la alegación al considerar que el enjuiciado presenta en su extracto de filiación y antecedentes la anotación prontuaria de haber cometido una conducta ilícita sancionada por el ordenamiento jurídico, lo que excluye la posibilidad de considerar que su conducta en el pasado ha sido libre de reproches penales y lo hagan merecedor de un menor castigo punitivo por sus acciones ilícitas acreditadas en este proceso penal.

DECIMOSEXTO: Que para la determinación de la pena del delito de desacato a resolución judicial, el Tribunal tiene en consideración que el acusado tiene la calidad de autor y el delito se encuentra consumado, que la pena asignada al delito es la reclusión menor en sus grados medio a máximo, que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar, por lo que el Tribunal aplicará el mínimo del castigo punitivo establecido por el legislador, considerando que en el curso de la audiencia de juicio no se incorporaron otros antecedentes que lleven a determinar que la conducta infractora deba ser reprochada con un castigo más severo que el mínimo legal al enjuiciado.

Tratándose de un delito en contexto de violencia intrafamiliar el Tribunal conforme lo ordena la Ley 20.066 impondrá la medida accesoria del artículo 9 de la citada ley, que se dirá en la parte resolutive de la sentencia y el lapso de tiempo de vigencia de esta.

DECIMOSEPTIMO: Que el delito de robo con violencia contemplado en los artículos 432 y 436 inciso 1° del Código Penal, en relación al artículo 439 del mismo cuerpo legal, es penado con presidio mayor en sus grados mínimo a máximo; que conforme con los antecedentes del proceso penal el acusado tiene participación en calidad de autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal; el delito se encuentra en grado de desarrollo consumado y para determinar la pena se debe considerar que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, lo que lleva al Tribunal a que la pena debe imponer al enjuiciado deba considerar que la especie sustraída fue recuperada por la víctima y que esta se le causaron lesiones que tardaron



alrededor de catorce días en sanar, por lo que el castigo punitivo se establecerá en el grado del presidio mayor en su grado mínimo en el quantum que se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

DECIMOCTAVO: Que en atención a que una de las penas privativas de libertad que se impondrán al enjuiciado, corresponde al presidio mayor en su grado mínimo, no procede sustituir las penas privativas de libertad y deberá cumplir en forma efectiva las penas temporales que se le impondrán en la forma en que se dirá en la parte resolutive del fallo.

DECIMONOVENO: Que se condena al acusado al pago de las costas del juicio al haber sido completamente vencido, conforme lo dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Penal, tomando en consideración que no se presentaron antecedentes ni se escucharon argumentos a los cuales se deba atender para eximir del pago de las costas al enjuiciado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N°6, 14 N°1, 15 N°1, 18, 21, 22, 25, 30, 50, 68, 432, 436 inciso 1° y 439 del Código Penal; artículo 240 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil; artículo 9 letra b) de la Ley 20.066; artículos 1, 36, 45, 46, 47, 282, 295, 296, 297, 309, 323, 328, 329, 333, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 348 y 468 del Código Procesal Penal; se declara:

I.- Que se condena a **ERNESTO ANDRÉS GATICA ARIAS**, cédula nacional de identidad N°17.352.088-3, ya individualizado, como **AUTOR** del delito de **DESACATO** a resolución judicial, cometido el día 24 de marzo del año 2022 en la comuna de Angol, a la pena de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN DÍAS** de reclusión menor en su grado medio y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena; y, a la accesoria del artículo 9 letra b) de la Ley 20.066, esto es la prohibición de aproximarse a la víctima Elba Del Rosario Sandoval Tapia, a su domicilio, lugar de trabajo o donde quiera que se encuentre por el plazo de dos años.

II.- Que se **CONDENA** a **ERNESTO ANDRÉS GATICA ARIAS**, cédula nacional de identidad N°17.352.088-3, ya individualizado, como **AUTOR** del delito de **ROBO CON VIOLENCIA**, en grado de **CONSUMADO**, cometido en la comuna de Angol el día 23 de marzo del año 2023, a la pena de **SEIS AÑOS** de presidio mayor en su grado mínimo, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

III.- Que las penas corporales impuestas al sentenciado, las deberá cumplir comenzando por la más grave, debiendo servirle de abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad en esta causa y que según da cuenta el auto de apertura, se debe contar desde el día 23 de marzo del año 2023 cuando fue sometido a la medida cautelar de prisión preventiva en audiencia de formalización de investigación, la que se ha mantenido vigente en forma ininterrumpida desde dicha fecha en adelante.

IV.- Que el condenado deberá comenzar a cumplir las penas una vez que quede firme o ejecutoriado el presente fallo, si no fuera objeto de recurso de nulidad.

V.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N°19.970 que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, en su inciso primero o segundo, según corresponda.

VI.- Que se condena en costas al sentenciado por sido completamente vencido en el juicio.



Ejecutoriada que sea la presente sentencia, remítase copia autorizada de la misma al Juzgado de Garantía respectivo, para los fines de lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales.

Remítase formato digital de esta sentencia definitiva por la Unidad de Administración de Causas a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el Tribunal.

Devuélvase la prueba acompañada, en su oportunidad, bajo constancia y recibo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

RUC N°2200285997-5

RIT N°2-2024

Código: 12149 - 803

Pronunciada por las Juezas y Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, señor Etienne Fellay Bertholet, quien presidió la audiencia de juicio, señora Karina Rubio Solís y señor Francisco J. Boero Villagrán.

